

Corte de Justicia de la Pcia. de Salta
Secretaría de Corte de Actuación
Avda. Bolivia Nº 4671 –2º Piso – Of. 3124
CJS- 42775. 23.
CJS- 42775 / 23
YUHMAK S.A. VS. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN

CEDULA
NOTIFICACION ELECTRÓNICA

DR.: LOPEZ BLUMBERG, CLAUDIO ALBERTO

Domicilio Electrónico: 2711 (LOPEZ BLUMBERG, CLAUDIO ALBERTO)

____ Por la presente NOTIFICO A UD., que en autos caratulados: **“YUHMAK S.A. VS. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN - COMPETENCIA”**, CJS- 42775/ 23 de esta Corte de Justicia, se dictó la siguiente resolución:_____

____ Salta, 01 de septiembre de 2023._____

____ **Y VISTOS:** Estos autos caratulados **“YUHMAK S.A. VS. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN – COMPETENCIA”** (Expte. Nº CJS 42.775/23), y_____

CONSIDERANDO:_____

____ **1º)** Que a fs. 42/43 la señora jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Primera Nominación de Orán declaró la incompetencia de ese Juzgado para intervenir en autos y dispuso que se eleven a esta Corte para que entienda de manera originaria, de acuerdo a lo prescripto por el art. 153, ap. II, inc. a) de la Constitución Provincial._____

____ Sostuvo, en lo esencial, que en el caso Yuhmak S.A. interpuso acción de declarativa de certeza ante el Juzgado Federal de Tartagal contra la Ordenanza 2268/22, promulgada el 14 de noviembre de 2022 por Resolución 3276/22 del Intendente Municipal de San Ramón de la Nueva Orán, por lo que la magistrada entendió que existe una vía legal específica -prevista en el art. 704 del C.P.C.C.- para la protección de los derechos que se dicen conculcados en autos._____

____ A fs. 49/50 vta. el señor Procurador General de la Provincia consideró en su dictamen que corresponde calificar la pretensión deducida como acción de inconstitucionalidad y declarar la competencia de esta Corte para intervenir en la causa, por los argumentos que allí expone._____

____ **2º)** Que corresponde recordar que para determinar la competencia debe atenderse, de modo principal, a los hechos expuestos por el actor en la demanda y después, y solo en la medida en que se adecue a ellos, al derecho invocado como fundamento de su pretensión (conf. CSJN, Fallos, 308:2230; 323:470; 328:73; 329:5514, entre otros)._____

____ **3º)** Que, en la especie, la sociedad actora solicitó que se declare la inconstitucionalidad de la Ordenanza 2268/22, promulgada el 14 de noviembre de 2022 por Resolución 3276/22 del Intendente de la Municipalidad de San Ramón de la Nueva Orán, en cuanto establece un sistema de pago anticipado a cuenta de la contribución que incida sobre la actividad comercial, industrial y de servicio sobre la comercialización de productos a la jurisdicción del citado municipio, a cuyo efecto actuarán como agentes de recaudación los inspectores que se establezcan al respecto, realizando la cobranza mediante pagos manuales en pesos argentinos que se

realizará en un puesto de control en los accesos a la ciudad. Asimismo, solicitó la devolución de la suma de \$69.350 (pesos sesenta y nueve mil trescientos cincuenta), abonada como consecuencia de la entrada en vigencia de la referida norma municipal. Fundó la inconstitucionalidad alegada en la afectación de los arts. 9º a 12, 31, 33, y 75 incs. 13 y 18 de la Constitución Nacional, subrayando que el sistema de pago anticipado de la contribución vulnera la prohibición de establecer aduanas interiores y el principio de igualdad ante las cargas públicas.

Sobre la base de tales consideraciones, la actora solicitó que previamente se dicte una medida cautelar de prohibición de innovar, a los efectos de que se suspenda la aplicación de la Ordenanza 2268/22. Ofreció su caución juratoria.

4º) Que, tal como ha sido planteada, la demanda de autos tiene por objeto la declaración de inconstitucionalidad de la Ordenanza Municipal 2268/22, por lo que la presente causa, que debe recalificarse como acción de inconstitucionalidad, corresponde a la competencia originaria y exclusiva de este Tribunal a tenor de lo dispuesto en el art. 153, ap. II, inc. a) de la Constitución Provincial.

Cabe señalar que la acción de inconstitucionalidad prevista por el art. 704 del Código Procesal Civil y Comercial tiene propósitos y fines específicos que no son comparables ni compatibles con los demás remedios contemplados en el plexo del ordenamiento jurídico local. Se trata de una acción que, como lo ha sostenido esta Corte de manera reiterada y uniforme, ha sido instituida para cuestionar ordenamientos jurídicos que estatuyan sobre materias regidas por la Constitución Provincial, independientemente de la denominación que se les haya dado -ley, decreto, reglamento, ordenanza, etc.- y es precisamente cuando tal mandato entra en colisión con las normas constitucionales donde cobra vida la mentada acción (conf. Tomo 117:603; 189:913; 204:973; 211:609, entre muchos otros).

5º) Que, en el caso, si bien la acción de inconstitucionalidad y repetición de pago se interpuso ante el Juzgado Federal con asiento en la ciudad de Tartagal el 24 de febrero de 2023 (v. fs. 1/17), dicho juzgado declaró su incompetencia material y ordenó la remisión del expediente a la Mesa Distribuidora del Poder Judicial de la Provincia de Salta, Circunscripción Orán (v. fs. 25/28), donde las presentes actuaciones pasaron desde el Juzgado de Garantías de Segunda Nominación (v. fs. 31) al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Primera Nominación de Orán (v. fs. 33), que también declaró su incompetencia. Es más, con posterioridad se presentó el Dr. Claudio López Blumberg, invocando el carácter de apoderado de la sociedad actora, y solicitó expresamente que la causa fuera remitida a esta Corte para su intervención, invocando la competencia originaria emergente del art. 153, ap. II, inc. a) de la Constitución Provincial (v. fs. 41).

6º) Que, en ese orden de consideraciones, el derrotero de la causa permite tener por superados los obstáculos formales relativos a la ausencia, en el caso, de una concreta contienda negativa de competencia a fin de evitar dilaciones que, en definitiva, puedan traducirse en una efectiva privación de justicia.

7º) Que en forma previa a resolver la medida cautelar peticionada corresponde verificar si concurren, en el caso, los presupuestos de admisibilidad de la acción de inconstitucionalidad y, en particular, si ésta ha sido interpuesta en término.

Sobre el punto, cabe recordar que el art. 704 del Código Procesal Civil

y Comercial establece que la acción de inconstitucionalidad debe interponerse dentro del plazo de treinta días contados a partir de la afectación de hecho de los intereses del actor. El plazo, de naturaleza preclusiva, se computa desde que el precepto impugnado produce la afectación de los derechos del accionante, la que se configura cuando sus disposiciones le son aplicadas (conf. esta Corte, Tomo 58:979; 66:001; 85:1077; 212:483, entre otros)._____

_____8º) Que de las constancias incorporadas a la causa surge que el 24 de febrero de 2023 la actora impugnó la Ordenanza 2268/22, promulgada por el Departamento Ejecutivo el 14 de noviembre de 2022 mediante la Resolución 3276/22 y publicada en el Boletín Informativo Municipal N° 92 el día 04 de enero de 2023 (conf. https://www.oran.gob.ar/munioranx/index.php?option=com_k2&view=item&id=2682:boletin-informativo-municipalsItemid=3664)._____

_____De este modo, cabe concluir que la ordenanza cuestionada cobró vigencia el referido día de su publicación -conforme surge de los propios términos de su art. 11- y, en consecuencia, es a partir de entonces que debe computarse el plazo de caducidad del art. 704 del Código Procesal Civil y Comercial, pues desde ese momento se configuró en el caso la afectación de hecho de los intereses de la actora._____

_____Ello así, la demanda presentada el 24 de febrero de 2023 resulta temporánea en virtud de la suspensión de términos que opera durante la feria judicial del mes de enero (conf. arts. 45 y 46 de la Ley 5642 y sus modificatorias)._____

_____9º) Que, declarada la competencia originaria del Tribunal y verificado el carácter temporáneo de la demanda deducida, corresponde seguidamente pronunciarse sobre la pretensión cautelar._____

_____En tal sentido, esta Corte ha establecido que si bien, por vía de principio, no proceden medidas como las solicitadas respecto de actos administrativos o legislativos habida cuenta de la presunción de validez que ostentan, cabe hacer excepción a dicha regla cuando se los impugna sobre bases “prima facie” verosímiles como contrarios a normas constitucionales o legales (conf. Tomo 208:305; 239:183, entre otros). Del mismo modo, ha sostenido que las medidas cautelares no exigen de los jueces el examen de la certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino solo el de su verosimilitud. Es más, el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad (conf. Tomo 72:911; 210:335, entre muchos)._____

_____10) Que, en ese orden de consideraciones, las constancias de la causa permiten concluir que, en el “sub lite”, se encuentran suficientemente acreditados los presupuestos establecidos en el art. 230 del Código Procesal Civil y Comercial para la procedencia de la medida cautelar solicitada._____

_____En efecto, de los antecedentes aportados por la actora surge que el procedimiento de control implementado por la Municipalidad de San Ramón de la Nueva Orán resultaría, “prima facie”, contrario a disposiciones constitucionales de carácter federal y provincial, en la medida que se condiciona el ingreso de mercaderías provenientes de extraña jurisdicción al pago a cuenta del anticipo de la contribución que incida sobre la actividad comercial, industrial y de servicio sobre la comercialización de productos en la jurisdicción del citado municipio, actuando como agentes de recaudación los inspectores que se designen, quienes realizarán la cobranza mediante pagos manuales en pesos argentinos que se efectuará en puestos de control

ubicados en los accesos a la ciudad.

Las normas cuestionadas aparecen, en un análisis preliminar, propio de la materia cautelar, contrapuestos a derechos constitucionales específicos, en particular, a los derechos de “entrar, permanecer, transitar y salir de la Provincia, llevando sus bienes”, “libertad de trabajo” y “ejercicio de cualquier actividad económica o profesional” (conf. arts. 27 y 28 de la Constitución Provincial). Ello permite tener por configurada la verosimilitud del derecho necesaria para el dictado de una medida de esta naturaleza, pues de mantenerse la vigencia de las normas impugnadas, podrían producirse consecuencias más gravosas que las que devendrían del otorgamiento de la protección cautelar. En efecto, la aplicación de los preceptos cuya inconstitucionalidad se peticiona, efectivizaría la amenaza de la lesión constitucional que se juzga verosímil.

Con relación al perjuicio que el mantenimiento de las normas cuestionadas puede ocasionar a la actora, dicho presupuesto surge de manera objetiva a poco que se considere que, de no disponerse la medida cautelar, la accionante podría ver amenazado su ingreso al municipio sin antes cumplir con el pago a cuenta del anticipo de la contribución cuya constitucionalidad es objeto del presente proceso.

En cuanto al peligro en la demora, éste recaudo aparece suficientemente configurado por la necesidad de suspender la vigencia de las normas impugnadas a fin de evitar que la actora se vea en la obligación de tener que seguir efectuando pagos cuya causa, “prima facie”, se exhibe como violatoria de cláusulas constitucionales expresas.

Por último, en lo que a la contracautela se refiere, corresponde puntualizar que si bien el solicitante de la medida ofrece caución juratoria, ella no se encuentra prevista en nuestro código de rito. Este tipo de caución consiste en el juramento que presta la parte que ha sido beneficiada con la medida, en el sentido de que responderá por los daños que pueda causar la cautelar obtenida, responsabilidad que existe aunque no se formule tal juramento. Ello es así, pues aquella nada agrega a la responsabilidad que le cabe al peticionario por aplicación de los principios generales receptados por los arts. 199, primer apartado y 208 del Código Procesal Civil y Comercial (conf. esta Corte, Tomo 85:671; 86:463; 209:35, entre otros).

Como consecuencia y previo a efectivizarse la medida, corresponde que la actora ofrezca caución real o personal de tercero a satisfacción de este Tribunal (art. 199 del C.P.C.C.).

11) Que en análogo sentido se ha pronunciado recientemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Loma Negra Compañía Industrial Argentina S.A. c/ Provincia de Misiones s/ acción declarativa de certeza”, sentencia del 27 de septiembre de 2022, cuya aplicación al presente caso, cabe señalar, fue expresamente invocada por la actora en la demanda (v. fs. 11 y vta.).

En dicho precedente, registrado en Fallos 345:1070, se interpuso acción de inconstitucionalidad en contra del Decreto 2913/07 y de la Resolución General 56/07 dictados por el Poder Ejecutivo y por la Dirección General de Rentas de la Provincia de Misiones, respectivamente, por los que se estableció un régimen de pago a cuenta del impuesto sobre los ingresos brutos conforme al cual, el estado demandado no permite el ingreso de mercaderías provenientes de extraña jurisdicción, si previamente no se acredita el pago del mencionado anticipo.

Al examinar la pretensión cautelar el máximo Tribunal entendió que la

normativa cuestionada resultaba, “prima facie”, contraria a disposiciones de carácter federal, por lo que resolvió acoger la medida precautoria solicitada. En consecuencia, ordenó a la provincia demandada “abstenerse de obstaculizar el ingreso de mercaderías fabricadas y comercializadas” por la actora “provenientes de extraña jurisdicción por el solo hecho de no haber efectuado el pago a cuenta de los anticipos del impuesto sobre los ingresos brutos” previsto en la norma impugnada. Asimismo, dispuso que la demandada deberá abstenerse de “adoptar cualquier medida que en forma directa o indirecta impida el ingreso y/o egreso de la mercadería con fundamento en las normas provinciales que aquí se impugnan y constituyen el objeto de estos autos, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en las presentes actuaciones”.

Por ello,

LA CORTE DE JUSTICIA,

RESUELVE:

I. DECLARAR la competencia originaria de este Tribunal para entender en la acción que se recalifica como de inconstitucionalidad, promovida a fs. 9/17 de autos.

II. HACER LUGAR a la medida cautelar solicitada y, en su mérito, **ordenar** a la Municipalidad de la Ciudad de San Ramón de la Nueva Orán que deberá abstenerse de obstaculizar el ingreso de mercaderías fabricadas y/o comercializadas por la actora provenientes de extraña jurisdicción por el solo hecho de no haber efectuado el pago a cuenta del anticipo de la contribución que incida sobre la actividad comercial, industrial y de servicio sobre la comercialización de productos en jurisdicción del mencionado municipio previsto en la Ordenanza 2268/22 y en la Resolución 3276/22 del Departamento Ejecutivo Municipal. Asimismo, deberá abstenerse de adoptar cualquier medida que en forma directa o indirecta impida el ingreso y/o egreso de la mercadería con fundamento en las normas municipales impugnadas, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en las presentes actuaciones.

III. ESTABLECER que la precedente medida se otorga bajo responsabilidad del peticionante y previa caución real o personal de tercero a satisfacción del Tribunal.

IV. COMUNICAR lo aquí resuelto al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Primera Nominación de la Ciudad de San Ramón de la Nueva Orán.

V. MANDAR que se registre y notifique.

Fdo.: Dra. Teresa Ovejero Cornejo –Presidenta-, Dr. Sergio Fabián Vittar, Dra. Adriana Rodríguez Faraldo, Dres. Guillermo Alberto Catalano, Ernesto R. Samsón, Dra. Sandra Bonari, Dr. Pablo López Viñals, Dra. María Alejandra Gauffin y Dr. José Gabriel Chibán –Juezas y Jueces de Corte-. Ante mí: Dr. Juan Allena Cornejo –Secretario de Corte de Actuación-.

La presente cédula ha sido firmada digitalmente, por el señor Secretario de CORTE DE JUSTICIA, Dr. ALLENA, JUAN, según Ley 25.506, de Firma Digital.

QUEDA UD. LEGALMENTE NOTIFICADO.

SALTA, 4 de Septiembre de 2023.-